

ECUADOR, PLAN COLOMBIA Y SEGURIDAD: UNA IMPREDECIBLE VECINDAD

Bertha García Gallegos

Docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador

I. Confianza y complicidad

Durante mucho tiempo, Colombia y Ecuador compartieron su mutua frontera con una confianza tal que no necesitó de reglas ni acuerdos institucionales, salvo en los temas de rigor previstos por las relaciones entre estados. Esta situación contrastó evidentemente con lo que ocurría en la frontera sur con el Perú, donde cualquier incidente podría desatar desentendimiento y sospechas que agudizaran el viejo conflicto territorial(*). Especialmente en la región central del norte ecuatoriano y el sur colombiano, esta confianza se tejió con profundas raíces históricas y sociales (Ecuador y Colombia compartieron en la colonia y en los primeros años de la República un territorio y una administración política común) no solo a través de un entramado de lazos de parentesco sino dentro de una verdadera cultura (la cultura “pastuza”). Esta comprendía desde un particular y común acento al hablar el idioma español, dichos y sabiduría popular, costumbres culinarias, hasta una complicada red de contrabando forjada a vista y paciencia de todos, acuciada, primero por el mayor grado de industrialización del vecino del norte y después por la exuberante producción agrícola de las provincias del Carchi e Imbabura que pasaba por el cordón fronterizo para aliviar los precios altos de la canasta colombiana. Esta red de contrabando, al menos en el caso ecuatoriano, fue matizada pintorescamente por la corrupción criolla vinculada al populismo¹. A partir de la era petrolera la frontera cultural, la confianza y el desvergonzado contrabando, se extendieron hacia la Amazonia. Primero Lago Agrio, luego Sucumbíos, todo el cordón fronterizo amazónico cuyos poblados se formaron rápida y caóticamente a la luz de los destellos del oro negro, la coloniza-

1. Referencia al conflicto ecuatoriano peruano.

ción, la transformación de las comunidades indígenas, la evangelización protestante y católica. Tierra de nadie, Policía y Fuerzas Armadas entendieron su misión de seguridad como una suerte de contención fronteriza que no implicaba inmiscuirse en los asuntos del otro lado: guerrilla, delincuencia, droga. Poco a poco se fueron conformando los dos espacios paralelos de la complicidad, el formal y el sumergido: tráfico o intercambio, según los casos, de fuerza de trabajo, alimentos, productos, armas, droga y un sin fin de elementos insertos en la legalidad y la ilegalidad.

En gran medida, ese conflictivo estatuto ha salido a la superficie y se ha convertido en un objeto de análisis en el Ecuador solamente a partir de la aplicación del Plan Colombia. ¿Qué es el Plan? ¿Cómo afecta al Ecuador? ¿Qué implicaciones tiene en el plano regional y cuales son las respuestas del país y de los grupos sociales domésticos? ¿Cómo afecta a la seguridad de la frontera norte? ¿Está el Ecuador preparado? Lo están sus Fuerzas Armadas y Policía para afrontar un conflicto con consecuencias impredecibles? ¿Cuáles son nuestras opciones para aportar a la creación de condiciones favorables para un proceso de paz en el vecino país? O, por lo menos, para que los elementos de esa conflictividad no agudicen la delicada situación interna de inestabilidad política y social que vive el Ecuador. Por ahora, cualquier respuesta no encuentra un camino fácil.

II. ¿Qué es el Plan Colombia?

Un primer problema está, sin duda, en la dificultad de entender qué es realmente el Plan Colombia y a qué situación político social se refiere. En marzo de 1998 una periodista colombiana alertaba a la prensa sobre el hecho de que no había un solo texto sino cinco versiones del Plan Colombia utilizadas por los actores estatales según las circunstancias². El Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Los Andes había hecho un estudio minucioso del texto. Encontró que el lenguaje utilizado, los objetivos y la organización de los capítulos eran diferentes. En la primera versión en inglés, publicada en 1998, el Plan era identificado como “una estrategia de inversión” social para zonas de conflicto. En

2 Marcela Sánchez (ANNCOL) <http://home3.swipnet.se/anncol/>

la versión en español, el Plan Colombia es concebido como “una estrategia integral” del gobierno colombiano, elaborada con el apoyo de asesores del Departamento de Estado de los USA. Existen apartes en el capítulo relacionado con la estrategia antinarcoóticos que no están en las otras versiones. También se encontraron contradicciones entre las versiones del Plan y el documento del gobierno sobre la “Diplomacia por la Paz”, en el que se enfatiza en la necesidad de alcanzar consensos. La falta de claridad explica, dicen los analistas, la reticencia e incredulidad de algunos de los actores del conflicto ante las propuestas del Plan Colombia³.

En su artículo “El Plan Colombia y el Conflicto Armado”, Alfredo Molano Bravo menciona que el Plan Colombia nació de una iniciativa del Presidente Pastrana, interesado en conseguir fondos de la comunidad internacional para reconstruir el país en un momento en que la paz entre el gobierno colombiano y los grupos insurgentes estaba en plena negociación. Presentado en Washington, un equipo del Departamento de Estado lo reelaboró desde la óptica de los intereses geopolíticos de los Estados Unidos y lo transformó en un plan de “pacificación regional” ante el aumento en América latina de los movimientos contestatarios a las medidas neoliberales implementadas en los últimos años. Con el objetivo de lograr la “estabilidad democrática regional” el plan forzaría un acuerdo de paz en Colombia, por medio del apoyo militar al Ejército colombiano. Aumentaría la presencia de los Estados Unidos en la virulenta zona “andino-amazónica” matizada no solo por la insurgencia guerrillera izquierdista que ha sobrevivido con más tenacidad a la guerra fría, sino también por la presencia de Chávez, “un caudillo que tiene las armas, los votos y el petróleo”; la presencia de un vigoroso movimiento indígena y campesino en Ecuador; la creciente importancia del movimiento de los trabajadores y los “sin tierra” en el Brasil; la impredecible oposición peruana a Fujimori y la reciente autonomía alcanzada por Panamá sobre una zona tan vulnerable como el Canal. Al mismo tiempo, el Plan atacarían de manera frontal al narcotráfico considerado como el problema número uno de la seguridad doméstica de los Estados Unidos⁴.

3. Aileen Tickner, Directora del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de los Andes, comparó las versiones del Plan Colombia. Marcela Sánchez, Loc. cit.

Los objetivos reales del Plan Colombia ni siquiera se dejan entrever cuando se examina su presupuesto y el destino del mismo. El Plan total alcanza a unos 7.5 millardos de dólares, con tres fuentes de recursos: el aporte norteamericano de aproximadamente 1.6 millardos de dólares que dedica el 80% de los recursos a inversión militar y 20% para inversión social; el europeo, de 2.5 millardos para inversión social y el aporte colombiano, de 3 millardos de dólares, de los cuales se desconoce las proporciones que irán para gasto militar y para inversión social.

Más allá de las intenciones geopolíticas regionales incluidas en el Plan Colombia y de la comprensión de sus objetivos reales, es necesario examinar lo que aparentemente es su nudo central: el conflicto colombiano, en el entendido que una situación de conflicto y un conflicto, en sí mismo, no remite a conceptos definidos, sino a realidades complejas que no permiten diagnósticos precisos, justamente porque involucran una gran variedad de factores, con potencialidad de transformarse en el tiempo y de generar sistemas de violencia organizada o no organizada, con alcances imprevisibles. Esto es, refieren a verdaderas culturas de conflicto que incluyen variados límites de tolerancia de las poblaciones y diversos impactos institucionales. Coincidimos con Molano Bravo en que el “narcotráfico no es el origen de los males de Colombia sino una de sus expresiones más dramáticas”⁵. Analizar las raíces de este conflicto y sus tendencias estructurales nos permitirá entender las implicaciones de su expansión e impacto regional.

III. Una historia de exclusión social y monopolio del poder

Conviene recordar que la estructura del conflicto colombiano y sus culturas concomitantes, tienen sus raíces desde la independencia, cuando comenzó a perfilarse una sociedad racista, jerárquica y excluyente. A mediados del siglo XIX ya se encontraron los poderes religiosos, económicos y políticos concentrados en manos de un reducido número de familias, en los embriones de los partidos liberal y conservador y en el centralismo político. No falta-

4. Alfredo Molano Bravo: “El Plan Colombia y el Conflicto Armado” en: PLAN COLOMBIA; ¿Seguridad nacional o amenaza regional?, Lima, CEPES, 2001.

5. Op. cit. p. 44.

ron los intereses extranjeros detrás de la separación de Colombia y Panamá, del control del Canal y de la United Fruit. A través de sucesivas modificaciones del poder, el enfrentamiento entre los dos bandos dejó en segundo plano, solo como formas secundariamente articuladas, a las rebeliones de esclavos e indígenas ocurridas al comienzo de la vida republicana, más tarde a las luchas de los artesanos (1919), de los militantes del Partido Socialista Revolucionario (1926), a las masacres de trabajadores de las bananeras de la United Fruit (1928) y otras. Pero la sangrienta guerra civil, con consecuencias hasta el presente, fue desatada en 1948 con el asesinato, atribuido a agentes conservadores, de Eliecer Gaitán, líder populista liberal. La guerra civil, duró diez años y dio paso a la formación de las guerrillas liberales en las regiones cafetaleras y a sus alianzas con las guerrillas comunistas surgidas como autodefensas en 1920.⁶

La etapa de formación de los grupos insurgentes ocurrió entre 1948 y 1980. La formación del Frente Nacional en 1958, entendimiento de las elites de los partidos liberal y conservador, excluyó a todos los otros grupos e impidió la implementación de las grandes reformas, como la reforma agraria, así como las exigidas por la Alianza para el Progreso en los años sesenta. La violencia sobre las poblaciones agrarias y campesinas fue el arma esgrimida por los terratenientes y gobiernos para sofocar las reformas, provocando una gran frustración nacional, la misma que puede estar en la base del narcotráfico y sus correlativos problemas actuales.⁷

En los años sesenta surgieron múltiples formaciones insurgentes de diverso signo ideológico, favorecidas por la desmovilización sin desarme promovida por el Frente Nacional; Camilo Torres creó el “Frente Unido por el Pueblo”. Los liberales comunes y los ex guerrilleros comunistas crearon las “Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia” (FARC) El “Ejército Nacional de Liberación” (ELN) que patrocinaba el modelo teórico de guerra focal, al estilo cubano y el Ejército Popular de Liberación (EPL) de tendencia maoísta, se instalaron en la costa atlántica entre 1966 y 1967.

6. *Op. Cit.* p. 44.

7. *Alfredo Molano, p. 45. Op. cit.*

En estos años surgieron también el movimiento indígena Quintín Lame y la Autodefensa Obrera (ADO)

La denuncia de fraude electoral en 1970 en el que participó la Alianza Nacional Popular ANAPO, partido populista de amplia aceptación urbana, produjo una segunda generación de movimientos revolucionarios, tales como el Movimiento 19 de abril (M-19) que adquirió gran notoriedad por su promoción de reforma, democratización y diálogo nacional y por sus espectaculares golpes de mano, como la ocupación del Palacio de Justicia en 1980. En 1978 subió a la presidencia el liberal Julio Turbay Ayala cuyo gobierno proclamó el Estatuto de Seguridad, una ley antiterrorista que concedió amplios poderes a las fuerzas de seguridad del Estado y produjo una ola de represión y asesinatos políticos. En toda esta época la tónica fue la acción represiva del gobierno que se valió del estado de emergencia y el terrorismo estatal.

Entre 1981 y 1999 se dieron los primeros intentos de negociación, el fortalecimiento del paramilitarismo y la instalación de la economía de la droga. A comienzos de los ochenta, al mismo tiempo que comenzó a tomar acciones contra los traficantes de droga, el conservador Belisario Betancourt inició un proceso de negociación con el M-19, las FARC y el EPL y consiguió un cese de fuego en 1984. El cuerpo principal de combatientes de las FARC renunció a la lucha armada fundando la Unión Patriótica (UP) como brazo político que buscaba integrarse a la lucha electoral. Pero un sector disidente pasó al paramilitarismo.

El proceso de paz se rompió en 1986. Las guerrillas se refugiaron en el monte ante la guerra sucia desatada contra ellas por narcotraficantes y grupos paramilitares de derecha. Los narcotraficantes invirtieron sus fortunas ilegales en tierras de Urabá y Magdalena medio, formando sus propios ejércitos privados para combatir a las guerrillas. Es la etapa de organización de los “Carteles de la droga”. Grupos paramilitares se formaron con el beneplácito de los militares o directamente por ellos mismos, a manera de estrategia contrainsurgente de armar a los ciudadanos. Como contrapartida, los movimientos guerrilleros empezaron a vincularse entre sí, conformando la “Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar” que inicialmente agrupaba al M-19, el EPL y ELN, a los que se integraron posteriormente las FARC. Con la coordinadora cobró una nueva fuerza el movimiento insurgente.

Entre 1986 y 1990 el liberal Virgilio Barco inició un nuevo proceso de paz, e intentó, sin éxito, desarmar a los paramilitares. Estos, apoyados por el Ejército regular, se convirtieron en un movimiento nacional financiado por el narcotráfico y promovieron la guerra sucia. La violencia arreció aún más ante la presión de los Estados Unidos que pugnaron por la extradición de los narcotraficantes.

Los años noventa son significativos por las luchas entre los carteles de la droga y por los intentos de pacificación política patrocinados por la Nueva Constitución, en los que se empeñó el liberal César Gaviria quien, al subir a la presidencia suspendió el estado de emergencia, rechazó la extradición de los narcotraficantes a los Estados Unidos, proponiendo, en su lugar, una política de negociación de penas a cambio de su rendición e inició el proceso político que culminó en la Constitución de 1991. La guerrilla indígena Quintín Lame y el M-19 y participaron en la Asamblea (el M-19 eligió el tercer Vice Presidente). La Nueva Constitución reconoció el estado pluriétnico y multicultural, con derechos para los indígenas (el 2% de la población) y para los afrocolombianos (el 30% de la población). Pero la nueva Constitución no llegó a tener ningún impacto ni en el nivel de la violencia ni en la búsqueda de la paz. Una de las razones de este fracaso fue la falta de participación de los dos grupos guerrilleros mayores, las FARC y el ELN, que buscaban una reforma en la distribución de la tierra, una reforma social y una reestructuración de las Fuerzas Armadas. Con el fracaso de la Constitución se renovó la guerra sucia y la violencia se triplicó favorecida por los conflictos entre los Carteles (Medellín y Cali).

Ernesto Samper, ganó las elecciones en 1998 con la oferta de conducir un nuevo y definitivo plan de paz que implica varios niveles. Por una parte, otorgar nuevas condiciones para que las guerrillas más fuertes entren a negociar a partir de prebendas iniciales como la concesión de territorios (Las FARC obtuvieron una concesión de cinco municipios al sur; el ELN está a punto de conseguirlos), al mismo tiempo que se propuso tener a raya a los grupos paramilitares que se independizaron de su antigua vinculación con los militares y exigían formar parte de los procesos de negociación. Samper se propuso fortalecer, además, las fuerzas milita-

res nacionales. Dadas las características de la lucha armada, era evidente que la paz no se alcanzaría con las armas, sino a costa de una violencia de impredecibles consecuencias y de grandes inversiones militares (se calcula una proporción de 10 a uno en el poder militar oficial con respecto al poder insurgente) Por ello, este fortalecimiento de las fuerzas armadas empezó a aparecer como una estrategia más disuasiva que ofensiva.

Pero, ni bien subió al poder, Samper afrontó serias acusaciones de haber recibido dinero del cartel de Cali para su campaña electoral. El gobierno de los Estados Unidos calificó a Colombia como una “narco democracia”. Aumentaron las tensiones políticas con Washington por la ineficacia del sistema legal colombiano burlado por los narcotraficantes. Estas tensiones adquirieron mayor importancia en la medida en que los Estados Unidos adoptaron la lucha contra el narcotráfico como eje regional de su política exterior y de seguridad doméstica. La crisis política externa dio la oportunidad para que se complique el conflicto armado interno. Entre 1996 y 1998 paramilitares y traficantes de droga penetraron en áreas del sur, fronterizas con Ecuador (El Putumayo) controladas por las FARC, comprando tierras, reclutando campesinos y organizando campañas de terror sobre las poblaciones. La lucha entre paramilitares y guerrilla por el control de esas regiones, no ocurrió de manera directa, sino a través de ataques a la población civil acusada de ayudar al correspondiente lado opuesto. Se hizo evidente que la sociedad no organizada, especialmente de las áreas rurales se convirtió en la víctima olvidada por todos los agentes de la violencia formal e informal. En los últimos años la situación general de Colombia se ha visto agravada con una crisis económica y financiera, especialmente sentida en las áreas rurales. Más de un millón de campesinos han sido desplazados del campo o asesinados por la violencia. El desempleo afecta a más del 20% de la población rural.⁸

Los grandes actores del conflicto tienen posiciones sólidas en diversos aspectos. Las FARC controlan grandes regiones pro-

⁸. Cita de las historia del conflicto.

ductoras de coca al sur del país y sustituyen a las instituciones del gobierno en áreas rurales donde cobran impuestos a los productores. Se calcula que en 1998 tenían por lo menos 20 000 hombres movilizados. El ELN tiene ubicaciones más fuertes sobre todo al Norte, Barrancabermeja y el Magdalena, sus ingresos se nutren de los impuestos que cobran sobre todo a las compañías petroleras.⁹ Los paramilitares han formado desde 1995 la “Coordinadora Nacional” bajo el mando de Carlos Castaño.¹⁰

IV. El desborde del conflicto; El Plan Colombia y sus Implicaciones regionales e internacionales

Los actores identificados en el apartado anterior han experimentado una dinámica transformación. Los principios ideológicos que mantenían las guerrillas de izquierda a comienzos de su formación han dado paso a intereses difíciles de precisar en la actualidad. Los analistas advierten que, hoy por hoy, estos grupos, así como los paramilitares son verdaderas maquinarias burocráticas de guerra con gran capacidad de generación de ingresos y auto mantenimiento, en gran parte por sus asociaciones con el narcotráfico, lo que hace difícil un acuerdo de paz en el futuro cercano.¹¹

Las negociaciones o intentos de negociación han sido repetidamente frustradas. En ese contexto se impone el Plan Colombia que, para completar su confusión aparece con dos objetivos: Uno de los Estados Unidos por erradicar los cultivos de coca y el narcotráfico en las zonas productoras. La otra, la de Colombia, que pretende institucionalizar un proceso de paz como eje para la reconstrucción social, política y económica del país. Los dos requieren el acompañamiento de un componente de fuerza de alto nivel, que implica el fortalecimiento del ejército colombiano como medida de disuasión.

El cuadro completo (si es que es posible definirlo) de la violencia formal e informal, entrecruzada, comprende además otros múltiples actores y otras múltiples posiciones e intereses. Están,

9. Cita de la situación colombiana ser en el 2000.

10. Cita de la situación colombiana ser en el 2000.

11. Ser en el 2000.

por ejemplo, las poblaciones directamente afectadas por la violencia, a más de, por supuesto, una opinión pública con límites muy amplios de tolerancia por el tiempo prolongado de exposición a ella. Están los intereses sumergidos de la ilegalidad, que participan como agentes proveedores de una amplia red de servicios ilegales (traficantes de armas, etc.). Por último están los actores, intereses y posiciones estatales y no estatales de los países que tienen fronteras de diversas características, conflictos o relaciones específicos con Colombia y que están sufriendo las consecuencias indirectas del conflicto, como el desplazamiento de refugiados. De entre ellos el Ecuador es uno de los más vulnerables, tanto por su condición política interna como por su fragilidad económica e institucional. Tanto por las características de frontera: amplia, abierta y poblada, como por los aún escasos niveles de definición de una política exterior, de seguridad y defensa relativa al conflicto y sus consecuencias. El Ecuador, como los otros países fronterizos a Colombia: Perú, Brasil, Venezuela, deben cuidar de que los actores ilegales de la violencia no se instalen en sus territorios a propósito de fronteras difíciles de vigilar, al mismo tiempo que debe proteger recursos de alta importancia estratégica, como el petróleo, situados a escasos kilómetros de la zona caliente.

La respuesta de los países latinoamericanos, especialmente de aquellos más involucrados en la zona del Plan Colombia y en general, de la comunidad internacional, debido a la rapidez de los acontecimientos se encuentra todavía en un proceso de definición. Pero los dos componentes más explícitos de la estrategia (pacificación interna de Colombia, erradicación de los cultivos de coca y marihuana, lucha contra el narcotráfico) han generado opiniones divergentes.

1. Proceso de paz. Existe un consenso en que el proceso de paz emprendido por el presidente Pastrana aunque difícil, es necesario y en ello la comunidad internacional tiene un papel como veedor o actor. Pero a este respecto, la actitud de la comunidad internacional no es monolítica dada la complejidad de actitudes e intereses que emanan de los diferentes actores (gobierno, guerrilla, autodefensas, ONG's, etc.) que buscan objetivos distintos en este mismo plano. "Las guerrillas buscan convencer a la comunidad internacional de la legitimidad de su lucha, mientras que

el gobierno busca que esa comunidad entienda la brutalidad y crueldad de la lucha guerrillera, así como su vínculo con el criminal negocio de las drogas”.¹² Dado que los frutos del proceso de paz solamente se verán en el largo plazo, es bien probable que se genere escepticismo, desilusión y desgaste entre los países que lo apoyan.¹³ En la actualidad, en los círculos intelectuales internacionales, aumenta la opinión de que cualquier acción de solidaridad con respecto a Colombia y su conflicto, debe hacerse bajo la premisa de que es, sobre todo, su sociedad la que está siendo agredida por todos los bandos estatales y no estatales, por los agentes formales y no formales de la violencia.¹⁴

2. Erradicación de los cultivos y políticas de sustitución de cultivos. El tema de la droga, erradicación de cultivos ilícitos y política de sustitución de cultivos, es mucho más complicado y sus componentes han merecido serios reparos. En primer lugar, la situación de los países andinos en la producción, tráfico y consumo de drogas es muy heterogénea y si bien hay datos más precisos para Bolivia, Colombia y Perú (productores) no los hay sobre el papel que juegan los demás países como Ecuador, Venezuela y México (de tránsito y producción), o Brasil, Argentina y Chile como centros de lavado de dinero y mercados en expansión del consumo de drogas.¹⁵ Hugo Cabieses: Drogas, Plan Colombia y región andina en Plan Colombia (p.13). La situación de violencia e inseguridad en Colombia dificultan la erradicación de los cultivos de Coca y el desarrollo alternativo. La experiencia indica que las acciones realizadas en un país afectan a otro. Hugo Cabieses (Drogas, Plan Colombia y región andina en Plan Colombia) señala como ejemplo que el éxito de la política antidrogas del Perú durante 1995-99, trasladó el problema a Colombia y Bolivia en 1995-97.

Asimismo, la erradicación forzosa en Bolivia a partir de 1998 alentó el resurgimiento de los cultivos de coca en Perú y Colombia en 1998-2000. En cuanto a la sustitución de cultivos, la entrada en producción de los cultivos de palmito en Bolivia y Ecu-

12. Fernando Cepeda Ulloa: “Colombia en el contexto internacional”. *Fundación Ideas para la Paz: Reflexión Semanal y Prensa Internacional*, mayo 23 de 2001.

13. *Ídem*.

14. Referencia a la declaración de intelectuales en París.

15. *Ídem*.

dor, provocó el desplome de esa agroindustria en el Perú. La guerra interna en Colombia afecta los precios internacionales del café y favorece las producciones peruanas, pero descuida otros cultivos como el cacao, la palma aceitera y el banano.

Las condiciones de legalidad de los cultivos de coca son igualmente diferentes: Bolivia y Perú respetan la producción de coca en las zonas donde esta ha sido tradicional, pero aplican la erradicación forzosa en las zonas de nuevos cultivos. En los dos países la erradicación es manual, siendo prohibida la fumigación. En Colombia la producción de coca, o cualquier otra droga –amapola y marihuana– son ilegales en todo el territorio nacional, aplicándose la fumigación con Glifosato en el sur del país, con efectos ecológicos lamentables¹⁶ (Cabieses, p. 14–15) que se esparcen incluso hacia las poblaciones de la frontera amazónica del Ecuador, donde los cultivos ilegales de coca están ingresando súbitamente.

El problema más grave, señala Ricardo Soberón Garrido, (Op. Cit. p.98) “Narcotráfico y Plan Colombia, nuevo mapa, políticas, situación, naturaleza y tendencias”, es que la comunidad internacional no ha tomado conciencia ni sobre la problemática de la demanda ilegal proporcionada por los grupos de traficantes, ni sobre el problema real que gira alrededor de los cultivos, esto es la extrema pobreza de las poblaciones campesinas. La propuesta de utilizar agentes biológicos para eliminar los cultivos ilícitos, además de su probada ineficacia¹⁷, traerá mayores conflictos en el futuro cercano para las poblaciones campesinas agudizando su pobreza. Lo que es peor, la utilización autorizada o no de “medios de control biológico” hongos y otros agentes patógenos convertirá a la Amazonia en otro escenario de guerra biológica. “Algunos internacionalistas prevén que los conflictos en el siglo XXI girarán alrededor de la explotación de los recursos naturales”.

16. *Ídem.*

17. *Veinticinco años de fumigación química en Colombia, contra la marihuana y el opio, contra la coca y la amapola, no han impedido que se convierta en el mayor y más diversificado productor de coca, marihuana y amapola en todo el mundo, en un contexto de agudo conflicto interno. Ricardo Soberón Garrido: Narcotráfico y Plan Colombia: Nuevo mapa, políticas, situación, naturaleza y tendencias: en “Plan Colombia” pp.98–99.*

Los nuevos escenarios de la seguridad

Es indudable que los elementos de la situación colombiana forman parte constitutiva de las nuevas estrategias continentales o regionales que se están armando después de la guerra fría. Es indudable también que desde mediados de los noventa la lucha antinarcóticos, ha reemplazado las dimensiones ideológico-políticas, que tuvo el comunismo como eje del concepto de Seguridad manejado por los Estados Unidos, al menos con respecto al continente. Algunos signos dejan entrever que en la administración Bush estos elementos se refinarán y adquirirán el carácter de una verdadera doctrina, con referencia no solo al Estado sino al individuo. Desde la perspectiva de los grupos conservadores domésticos de los Estados Unidos, las drogas atacan elementos sensibles de la condición humana de los consumidores, sus ciudadanos y por esta vía, afectan intereses de la nación. El mismo esquema de contrainsurgencia de la Guerra Fría puede resurgir si de adopta como perspectiva de esta lucha el uso de la fuerza como estrategia disuasiva y el desarrollo como cobertura.

Por la experiencia pasada existe desconfianza y recelo en parte de esos países y en especial de sus Fuerzas Armadas por entrar nuevamente en un sistema regional de defensa. Los años noventa permitieron un cierto respiro con respecto a alianzas estratégicas no nacionales y cierto espacio de consolidación de estrategias internas de reestructuración de las Fuerzas Armadas. Por otra parte no existe la experiencia y el liderazgo debido para ensayar una política regional autónoma. La vulnerabilidad económica de estos países también atenta contra su autonomía en esta materia. Las respuestas hasta aquí por parte de los países que rodean la zona del conflicto colombiano han sido más bien individuales aunque con consensos en torno a no involucrarse en una lucha armada que podría producir un nuevo Vietnam. Perú y Brasil han definido un acordonamiento de tropas a lo largo de sus respectivas fronteras con Colombia; Venezuela ensaya acuerdos de diverso género tanto con el gobierno colombiano como con los actores no estatales, especialmente FARC y LN. No creo que el Ecuador tenga definida aún una política integral de seguridad al respecto. También habría que pensar en cuáles van a ser las estrategias o contra estrategias de los sectores insurgentes colombianos y del

narcotráfico en el caso de que se dispare el potencial de regionalización o internacionalización que tiene el Plan Colombia.

No está claro ni las intenciones de los Estados Unidos ni la apreciación por parte de los países de América Latina, una estrategia que se va de las manos y produce suspicacia. Al comienzo rumores (SER) en el 2000 de una intervención de paz”, luego de una ingerencia que terminaría en una ocupación por parte de los Estados Unidos. El rechazo por parte de nuestros países a entrar en un conflicto sin predicciones. La inclusión de Ecuador y la disputa sobre las bases de avanzada una vez retirados los Estados Unidos del CANAL. Sospechas. Expectativas sobre lo que harán los países fronterizos. El problema Bush y su perspectiva de regionalización. Temor a una invasión de los Estados Unidos que nunca se había dado en América del Sur. Aquí las intervenciones han sido políticas y no intermediadas. Distintas formas de ver la regionalización: lo que dicen los peruanos; lo que dice el Pentágono hasta el Plan Andino. Lo que más asusta es la ingerencia de los Estados Unidos de manera directa. Problemas en los países.

En Ecuador desde la base de Manta, las condiciones, las expectativas y las respuestas negativas. Falta de claridad. Desestabilización política y de las Fuerzas Armadas produce temor sobre la capacidad del Ecuador para responder al Plan Colombia.

Expectativas frente a un plan de desarrollo liderados por las Fuerzas Armadas, militarización de la frontera. Los secuestros e incidentes en la frontera. Los refugiados (ACNUR) las rondas conjuntas entre Policía y Fuerzas Armadas, el Fuerte Amazonas y la mejor preparación de los ecuatorianos. Poco a poco. Regionalización como una posición conjunta de los países que es difícil darse o no se ha dado, por la diferentes perspectivas.

¿Cómo debe asumir el Ecuador?

Hay más preguntas que respuestas y viene a colación la complicidad de la que se habló al principio. La participación en un orden, con estructura propia, se busca respuestas pero por lo menos se pide que se esté alerta. Se formen seguimiento de los procesos con objetividad. Se ha hecho esto pero de manera parcializada como se hace en Ecuador. Faltan análisis serios.

V. Consideraciones sobre la posición e impactos del Plan Colombia en el Ecuador

En lo que respecta al Ecuador hay algunas preguntas que podemos formularnos, como guía de un necesario seguimiento de los procesos en los que ya estamos o estaremos involucrados necesariamente, por el conjunto de condiciones derivadas de nuestra vecindad al conflicto y al desarrollo del Plan.

¿Cuál es la capacidad del país para enfrentar problemas, como el desplazamiento de grandes contingentes humanos huyendo de las acciones militares o de otras estrategias (como la fumigación) adoptadas en el marco del Plan Colombia?

¿Se modificará la tradicional tendencia ecuatoriana de guardar una respetuosa actitud hacia las diferentes expresiones políticas al interior de otros países hermanos?

¿Se propenderá a un mayor grado de militarización de la frontera o de la sociedad a lo largo de ella? De ser así, ¿cómo afectaría esto a las relaciones entre el sector político y el militar? ¿Cómo afectaría a la propia vida institucional del país? Estas preguntas nos llevan a ver el problema en el marco de la gobernabilidad democrática, perspectiva que no debemos perder de vista, cualquiera fuera el país que analicemos.